

# Soberanía alimentaria: de utopía romántica a problema político

*Juan Manuel Villulla\**

Voy a partir del supuesto de que los lectores comparten conmigo el interés y el deseo de contribuir a nuestra soberanía alimentaria. Lo voy a dar como un supuesto en el cual me incluyo: creo que como pueblo necesitamos ir en esa dirección. Dicho esto, me gustaría comentar algunas cuestiones que me parecen problemáticas en relación a cómo está planteado en general el problema de la soberanía alimentaria en la agenda de los movimientos populares en Argentina.

Hay tres grandes problemas que quería plantear. El primero, ¿cuál es el sujeto de la soberanía alimentaria? ¿Quién la encarna? ¿Quién está interesado en llevarla adelante? ¿Quién lucha por ella real o potencialmente? Esto lo pregunto en términos de clases sociales, grupos sociales o corrientes políticas: ¿quién sostiene esa bandera en la realidad y potencialmente? Desde ya esta cátedra de soberanía sería parte de los sujetos, pero veamos el cuadro en su conjunto.

Segundo, ¿contra qué o quiénes es la soberanía alimentaria? Si es que no se trata de un interés en el que estamos todos de acuerdo –y evidentemente no estamos todos de acuerdo–, ¿quiénes son aquellos que no están de acuerdo con la soberanía alimentaria? ¿Quiénes se resisten concretamente a este rumbo y por qué?

Por último, ¿qué es lo que hay que cambiar para que la soberanía alimentaria en Argentina sea una realidad? Tres preguntas básicas que nos servirán como cimiento para una reflexión abierta y continua, con una perspectiva propicia para el debate de distintos actores involucrados en estos asuntos claves para la actualidad que vivimos.

Me parece importante situar nuestra reflexión. En Argentina el 90 % de la población vive en ciudades. Eso no quiere decir necesariamente que el 90 % de la población no se dedique al agro, ya que muchos productores agropecuarios y trabajadores rurales que trabajan en el campo viven en ciudades. Pero, de todos

modos, entre la Población Económicamente Activa total del país, la proporción que trabaja en el campo no pasa tampoco del 15 %. Acá ya hay un tema. Solo con este dato tenemos una cuestión importante que remite a la primera pregunta, ¿quién es el sujeto de la soberanía alimentaria?

Si estamos hablando del derecho de los pueblos a decidir de qué alimentarse y de poder controlar las condiciones en que esos alimentos son producidos, en este caso el 85 % de la población tendría que decidir qué produce y cómo produce el otro 15 % que está verdaderamente dedicado a las tareas agropecuarias. En un sentido no estaría mal, porque es una mayoría versus una minoría. Pero cualitativamente hablando, esto es un problema. ¿Pensamos alguna vez en esto? O sea, acá hay un tema que me parece que está planteado para quienes luchamos por la soberanía alimentaria pero no tenemos ni un campo, ni nos dedicamos a la actividad agropecuaria. Y me da la impresión de que, al menos en Argentina, la causa de la soberanía alimentaria está más difundida entre la militancia urbana consumidora que entre las clases populares productoras del campo. Entiendo que esta es la raíz objetiva de que, en general, la soberanía alimentaria la consideren muchos productores y trabajadores agropecuarios como un tema ajeno, algo externo, que se les impone “desde afuera” como una agenda que no responde a las necesidades que ellos mismos tienen planteadas. Esta exterioridad de la causa de la soberanía alimentaria –y muchas otras respecto al mundo agrario real en una Argentina eminentemente urbana– me parece un problema serio y es una contradicción que se está planteando de manera práctica, particularmente acá en Entre Ríos, por ejemplo, con las movilizaciones que hubo a favor y en contra de las restricciones al uso de agrotóxicos, agroquímicos o fitosanitarios. Es uno de los pocos lugares donde empieza a haber movilizaciones desde ambas posiciones.

Volviendo al punto, me hace ruido este aparente “choque de derechos”. ¿Con qué derecho una parte de la población decide lo que tiene que producir y cómo la otra hace valer el derecho a una alimentación sustentable? Y aunque lo logran, ¿cómo lo harían? Por un lado, tenemos el derecho social y colectivo a la soberanía alimentaria. Por otro, el derecho individual a la propiedad privada sobre la tierra o sobre el producto de una tierra alquilada, que habilita a su propietario hacer con ello lo que quiera. Unos derechos fundamentados en un interés colectivo o de

mayorías; y otros basados en un interés individual o de corto plazo. En la Argentina, los segundos son reales y rigen el funcionamiento de la sociedad. Los primeros, son un proyecto. ¿Cómo se resuelve ese “choque de derechos” en la práctica?

Tengo algunas hipótesis. Pero creo que además de esta suerte de cuestión “jurídica”, es necesario desplazarnos al campo de la economía. O a la economía del campo, como ustedes prefieran. Muchas veces la conceptualización original de la soberanía alimentaria vinculada a la “Vía Campesina” parece olvidar que la mayor parte de los productores no produce para “dar de comer”, sino que producen algo que le dé dinero para sobrevivir como chacarero o campesino. Del mismo modo que quien fabrica pulóveres, no fabrica pulóveres para que la gente se abrigue, o que quien fabrica casas no lo hace para que la gente viva ahí, sino para obtener a cambio dinero con el cual comprar las demás cosas que no produce. Pueden desear, naturalmente, proveer de abrigo y vivienda a la población, pero no es eso lo que explica su supervivencia económica. Quien hizo mis anteojos no los hizo para que yo pudiera ver, sino para tener dinero a cambio de ellos. Si yo no le puedo dar el dinero que necesita –que es lo que le costó el antejo más una ganancia–, no los voy a poder comprar. No estoy seguro de cuánto le importa al vendedor de anteojos si yo veo o no veo. A la mayor parte de los productores de mercancías no le importa si lo que producen satisface las necesidades, salvo en la medida en que la satisfacción de esas necesidades les permita llegar a su verdadero fin económico, que es vender y obtener el dinero para, a su vez, satisfacer sus propias necesidades. En definitiva, hacen lo que hacen para venderlo en el marco de una economía de mercado, en un régimen mercantil. Y más exactamente, lo hacen subsumidos en el *súmmum* del régimen mercantil que es el capitalismo.

Esto quiere decir que el fundamento de la producción bajo el capitalismo agrario es en cierto modo un contrasentido: se producen alimentos, pero no para “alimentar al mundo”, sino para otra cosa. La producción de alimentos –aunque sea una posible vocación de empresarios, campesinos u obreros rurales–, no es un fin sino un medio. Se trata de un medio para conseguir otra cosa: una cantidad de dinero que permita la reproducción social de una familia campesina, la supervivencia de un hogar obrero rural, o la acumulación de capital de una empresa. En el capitalismo las relaciones humanas y con las cosas están mediadas por este

tipo de pautas instrumentales. Los fines manifiestos –como “alimentar al mundo”– en realidad son los medios, y los medios, como el dinero, terminan por ser los fines. Y así, la verdadera utilidad social de las mercancías, su valor de uso, representa solamente una base, un soporte, una condición de posibilidad para poder venderlas y transformarlas en dinero –como signo del valor de cambio–, para con él comprar, a su vez, otras cosas. En esto incluyo como mercancía a la fuerza de trabajo de asalariados y asalariadas.

En cualquier caso, el fin que moviliza a todo el universo agropecuario bajo este sistema social no es el de “alimentar al mundo” –como curiosamente postulan por igual tanto las grandes empresas del agronegocio como muchos movimientos campesinos para legitimarse socialmente cada uno a su modo–, sino que esa consigna loable es en la realidad práctica reducida a un medio, un instrumento que posibilita otra cosa. Si no está el dinero para cambiar por el alimento, nadie entrega ningún alimento para alimentar ningún mundo. De ahí que, en nuestros días, el problema del hambre en el mundo sea –por primera vez en la historia de la humanidad– un problema que tiene que ver menos con cantidades insuficientes de comida producidas, que con consumidores de alimentos que no tienen el dinero para comprar los alimentos que ya están producidos, y que a veces hasta se pudren en los campos, en las góndolas o en los restaurantes.

No quiero poner el ejemplo obvio de las grandes empresas capitalistas que mandan el desarrollo de los agronegocios en Argentina. Prefiero invitarnos a releer en esta clave una imagen que la mayoría de las veces es romantizada: por ejemplo, ¿de qué se quejan los campesinos que últimamente hacen los “verduzos” en plazas importantes de la Capital Federal y otras ciudades importantes del país? Se quejan de que no les pagan el precio justo por lo que están produciendo. Y como parte de esa protesta, salen –ahí sí, y de modo extraordinario– a regalar los alimentos. Pero ni siquiera los campesinos de la UTT, del MTE rural, la FNC o quien sea, sobrevive “regalando” la comida de modo regular. Ni siquiera los campesinos de los cinturones hortícolas –que posiblemente sean la punta de lanza de la lucha por la soberanía alimentaria y muchas otras cosas en Argentina– producen directamente para “darle de comer a la gente”, sino que necesitan a cambio de eso una cantidad de dinero que les permita comprar el resto de las

cosas que satisfaga sus propias necesidades. Necesidades que, por otra parte, no se limitan solo al mero alimento, sino que abarcan su vestido, sus medicamentos, los servicios básicos, el alquiler o los arreglos de sus viviendas, los útiles escolares de sus hijos, el transporte público o el combustible para moverse, los impuestos, y si es que su actividad les dejara tiempo, costearse un momento de esparcimiento como le dé la gana. Es decir, necesidades sociales, histórica y culturalmente constituidas, y no meras “opciones” caprichosas resueltas en el ámbito íntimo de una individualidad que en realidad no existe.

Este problema, entonces, no se origina en la voluntad individual o las convicciones de uno u otro productor aislado, sino en el conjunto del sistema social en el que este se inserta. A tal punto que, aun teniendo como fin genuino la alimentación de la población –como es el caso de gran parte de los movimientos campesinos–, no es posible hacerlo sin intercambiar esa producción por aquello otro que el productor agrario no produce, a través del dinero. A todos los productores individuales, sean chicos, medianos o grandes, se les presenta por igual el problema de sostener económicamente su unidad productiva. Obtener a cambio de lo que producen una cantidad de dinero que resuelva los costos y al mismo tiempo les dé la ganancia –en el caso de los capitalistas– o que le permita sobrevivir –en el caso de los agricultores familiares, campesinos o chacareros–.

Si el 99 % de los productores agropecuarios produce en base a estos parámetros, esto quiere decir que, aun teniendo la voluntad de ir en el rumbo de la soberanía alimentaria o de producir otra cosa, estos se van a ver constreñidos, condicionados, “apretados” (dicho en criollo) por circunstancias estructurales que los van a predisponer más a producir soja que tomate. Esta opción rara vez existe, pero la traigo para contrastar: la imagen de un *commoditie* de exportación y la de un alimento inmediatamente consumible. Esto tiene que ver con necesidades objetivas que se les presentan, insisto, a todos los productores, y sobre todo a los más insertos en el mercado, como los productores extensivos pampeanos.

Entonces, de esta encrucijada, la causa tiene que ver con el sistema social, en su carácter dinámico e interdependiente, en el que se inscribe cada productor individual sea del tipo que sea, y que hace que la encarne como un constreñimiento, que

los condiciona a la hora de decidir qué producir y cómo. Por tanto, considero que desde la lectura de estas cualidades, habría que contextualizar cuáles son los métodos productivos que se usan –destinados a ganar productividad y rentabilidad en el marco del capitalismo agrario–, y su contradicción con otro tipo de intereses de la población, como las poblaciones aledañas a campos fumigados, que pagan con su salud o con sus vidas el sostenimiento económico de un tercero, que puede ser un pequeño productor o un gran empresario. Tanto para pensar la cuestión de los agrotóxicos como la de la soberanía alimentaria, esto lo traigo para no dividir entre “la buena gente” y “la mala gente”: la mala gente que aplica agrotóxicos y la buena gente que es intoxicada. No quiero decir que no haya mala gente o buena gente. Pero para explicar y transformar esta realidad me parece que es necesario ubicar el tema de los intereses y objetivos que mueven a las dos partes y cómo resolver adecuadamente esta contradicción, que puede ser de dos sectores distintos del pueblo, apuntando a jerarquizar la vida y la salud pública por sobre intereses económicos particulares, que, según el caso, serán más o menos atendibles.

En primer lugar, entonces, ubicamos a *grosso modo* estos condicionantes externos que se les presentan a los productores del tipo que sea. Pero, además, en segundo lugar, este sistema social no solo se nos presenta a todos como un problema “exterior”, que viene desde afuera y nos impone determinado tipo de necesidades objetivas. También es un sistema social que forma nuestra subjetividad. Es decir, no solamente nos plantea determinadas necesidades para sobrevivir, también forma lo que deseamos, lo que tenemos ganas de hacer. Un ejemplo simple: el tipo de ropa que nos compramos. Cuando vamos a comprar ropa no solamente satisfacemos la necesidad de abrigo, sino que además tenemos algún tipo de criterio estético que tiene que ver con una interacción de símbolos en términos sociales. Si yo diría que todos ustedes van a tener abrigos, y les doy un overol con la franja fosforescente y demás de un operario fabril o de vialidad, ustedes van a decir “bueno sí, estoy abrigado, pero no sé si quiero vestirme así para ir a un cumpleaños”. Del mismo modo, determinado tipo de productores en determinadas zonas del país tienen una historia vinculada a producir determinado tipo de bien agropecuario y no otro. Existen localidades de colonos que saben, quieren y están acostumbrados a producir granos desde hace más de cien años, o carne vacuna, o leche, o cerdos, o lo que sea. Y en el contexto de la crisis de las PyMes agropecuarias,

ante sus quejas por la falta de rentabilidad, he escuchado muy frecuentemente cierta condena “moral” en nombre de la soberanía alimentaria: “se quejan, pero tienen doscientas hectáreas de trigo, ¡ahí sabes la cantidad de tomate que hacés!”. Sería problemático hacer doscientas hectáreas de tomate. Pero además de eso, es posible que antes de hacer tomates un chacarero deje de ser productor agropecuario. Porque ese viraje no es solo “productivo” sino que está chocando contra toda una historia interiorizada que vive a través suyo, contra su propia subjetividad. Y esto es distinto según se trate de la región del litoral argentino, de la puna, del campesinado europeo o del campesinado mexicano. Es decir, de distintos sujetos sociales que están conformados de acuerdo a una estructura y a una historia, y que no pueden cambiar así nomás de producción y menos si está decidida por otros que están afuera de ese mundo.

De modo que, así como establecimos antes que en el sistema capitalista la satisfacción de necesidades y la producción están mediadas por el dinero –o más exactamente, por la acumulación de capital–, eso no quita que coexistan con todo aquello distintas orientaciones, opciones o vocaciones productivas que no se explican solo por el dinero que se recibe a cambio de hacerlas, sino que también interviene aquí un elemento cultural e histórico. ¿No es así en el caso de los y las profesionales que han elegido una determinada disciplina? ¿Quién obligó a determinada persona a ser arquitecto y no abogado? ¿Debe ejercer gratis un arquitecto por el hecho de haber elegido su profesión? Y si en determinada coyuntura no hubiera espacio en el mercado para un solo arquitecto más, ¿es tan fácil decirle a alguien que si no consigue trabajo de lo suyo se dedique a otra cosa?

En resumen, tenemos de un lado condicionantes económicos –producción subsumida bajo el capitalismo–, y del otro, condicionantes históricos y culturales, que conectan la subjetividad de los productores y trabajadores rurales con el contenido específico de lo que hacen. De este modo, qué se produce y cómo se produce no está solamente dictado por unas situaciones de mercado de corto plazo –por ejemplo, el precio de la soja determinada temporada–, sino que además de eso, también interviene una historia larguísima, que habría que ver en qué ritmos y bajo qué condiciones se transforma –y por quiénes– para abrir una nueva etapa histórica que traerá nuevas tradiciones. En cualquier caso, lo que produce un país

no es un “problema técnico” u organizativo, ni una opción individual aislada respecto a un conjunto de estímulos y predisposiciones constituido históricamente, de modo contradictorio, como la resultante de distintas fuerzas en pugna.

En efecto, ese 10 % o 15 % que se ocupa en la producción agropecuaria, en términos sociales es extremadamente heterogéneo en su interior, y posee distintos motivos para hacer lo que hace en el campo. Por empezar, la mayor parte de la producción agropecuaria se concentra en grupos muy concentrados, propietarios de tierras y capital muy grandes. El caso de la soja es un clásico: la facturación está concentrada en un 10 % de firmas. Uno saca la conclusión de que no es necesario meterse con el otro 80 % para resolver el problema de las retenciones. Esta producción concentrada tiene como contracara una estructura social polarizada: dependiendo la provincia, entre un 60 y 70 % de los ocupados en el campo trabaja en relación de dependencia. En otras palabras, entre el 60 y el 70% de la Población Económicamente Activa agropecuaria de la zona pampeana son obreros asalariados que no deciden ni qué se produce ni cómo se produce, y que a la vez son víctimas de los métodos productivos que ellos mismos operan, expuestos como están a muy malas condiciones de trabajo. Por otro lado, estos trabajadores rurales consumen esos mismos alimentos transgénicos o expuestos a agrotóxicos que hacen otros productores o trabajadores que viven en otro lado, y así sucesivamente. Es decir, visto de conjunto, los principales productores directos del agro hoy –los trabajadores asalariados– también son consumidores de aquello a lo que pretendemos que acceda el conjunto de la población y que sea producido de otro modo. Sin embargo, en general, no conozco experiencias de algún número importante de trabajadores asalariados que participen de las movilizaciones por la soberanía alimentaria, ni como productores ni como consumidores. ¿Qué está pasando ahí en relación a este tema del sujeto?

Es más, dada la exterioridad de la causa de la soberanía alimentaria para buena parte del mundo agrario que comentábamos al principio, esos mismos trabajadores pueden intuir que si se cambian los métodos productivos y un montón de otras cosas, podría tratarse de una transformación amenazante en relación a sus condiciones de vida, sus puestos de trabajo y demás. Si se trata de una lucha desplegada solo por estudiantes, blancos, limpios, de capas medias, que se movilizan

en las ciudades, muchos trabajadores piensan “¿Qué quieren estos, que me quede sin laburo o que se funda mi patrón?”. Es un tema que vuelve sobre la pregunta inicial acerca de quién es el sujeto de la soberanía alimentaria o los sujetos de la soberanía alimentaria, y contra quiénes se dirige en términos sociales. ¿Será con o en contra de los miles de trabajadores rurales empleados en explotaciones con métodos contaminantes, o que producen *commodities* para el exterior?

Derecho a la soberanía alimentaria, derecho de los pueblos a decidir. Pero tal y como está planteada la formulación de la “Vía Campesina”, ¿cuáles son las instancias reales en las que el pueblo decide qué comer o cómo se produce lo que comemos? ¿Qué tenemos previsto en relación a eso? ¿Cómo se hace para que el 90 % de la población decida qué y cómo produce el otro 10 %? ¿Son asambleas? ¿Se decide a través de los poderes legislativos ya existentes? ¿A través de la elección de nuestros representantes? ¿De esas instancias formarían parte los productores? ¿Los productores agropecuarios pasarían a ser algo así como trabajadores asalariados de un Estado realmente soberano, que producen tal y como le dice –por ejemplo– una asamblea popular de una ciudad? ¿Hay otro tipo de opciones de corto plazo compatibles con la economía capitalista y la institucionalidad republicana? ¿Hay alguna experiencia de base para tomar ideas?

Una de las visiones más difundidas entre quienes empujamos la soberanía alimentaria, imagina una solución que parece más “realista” –porque naturaliza nuestra realidad como algo dado–, pero en realidad es mucho más ingenua en lo que hace a cómo resolver este problema y todo lo que eso implica. Esta visión cree poder transformar qué y cómo producen los que producen a través del consumo de los que no producen. Pero, además, en esta visión, el consumo es concebido como un acto eminentemente libre e individual. Por lo tanto, parece que de lo que se trata esta lucha es de sumar voluntades para comer de manera más saludable: “comprá agroecológico, no le compres al supermercado”. El derecho a la soberanía alimentaria se reduce al derecho a tener alternativas en la góndola y, por lo tanto, el único soberano aquí es el individuo. ¿Qué se espera? Que individualmente, de manera atomizada pero masiva, se transformen las pautas productivas a través de transformar primero las pautas de consumo. Entonces esta vertiente de la militancia por la soberanía alimentaria gira: ya no le habla a los

productores –a los que, en un sentido, “da por muertos”– sino que le habla a los consumidores. Ya asumió que los productores agropecuarios –en calidad de empresarios, campesinos o asalariados–, elegían libremente sin condicionamientos objetivos ni subjetivos qué y cómo producir, y que pudiendo hacer algo mejor, elegían producir comida basura con métodos basura. De ahí la “condena moral” a todo el mundo social agrario. Ahora, con el mismo esquema interpretativo, giran y asumen lo mismo respecto a los consumidores: que pueden elegir qué consumir sin otro condicionamiento social que la publicidad de las grandes marcas.

No me voy a meter a fondo en el problema de que, en el caso argentino, gran parte de la producción agropecuaria ni siquiera se consume acá, ni es humanamente consumible de inmediato, como es el caso de los granos: nada menos que el 60 % de la superficie cultivada. En ese caso, ¿la solución a nuestro problema estaría en manos de los consumidores chinos? O peor aún, a niveles absurdos, ¿está en manos de los cerdos que consumen esos granos? ¿Habrá algún consumidor en China que pregunte por los métodos con los que fueron producidos del otro lado del mundo los granos con los cuales se alimentó el animal del que le llegó sólo una feta de jamón o un litro de leche? ¿Es posible distinguir los métodos productivos con los que se producen granos que se transportan a granel, unos mezclados con otros? Todo esto parece improbable. Pero en ese caso, si el tema es modificar las pautas de consumo, ¿desde qué cuerda se tirarías para cambiar los métodos productivos de los granos o para producir otra cosa en Argentina? ¿Desde el consumo local? ¿Creemos que no hay suficiente demanda local de alimentos y por eso exportamos? ¿Qué pasaría si volcamos todas las hectáreas puestas en producción agropecuaria de nuestro país a un mercado de solo 40 millones de consumidores?

Nuestro principal problema es que vivimos en un país en donde un porcentaje enorme de la población vive sumergido en la pobreza y muy pocos pueden elegir qué comer. Estamos llenos de malnutrición a partir de la saturación de hidratos de carbono, de todo tipo de harinas, fritos y demás: comida basura y azúcar por todos lados para aguantar. Si de lo que se trata es de traccionar a partir de opciones de consumo, entonces hay una gran parte de la población que estamos dejando afuera, porque simplemente no tiene recursos para elegir. Y muchas veces lo orgánico o lo agroecológico es más caro que lo convencional y justamente por

eso predomina lo convencional sobre lo agroecológico, por lo menos hasta ahora. ¿Cómo resolver esto desde el consumo cuando hay una parte enorme de la sociedad argentina que no llega ni siquiera a consumir una canasta de alimentos convencionales porque no tiene el dinero que piden los productores –mediados por la comercialización– para cambiar por esos alimentos? Además, a estos condicionantes económicos externos, también sumo otro aspecto, como observábamos en el caso de los productores: el contenido de las pautas de consumo de la población que sí puede comprar, también están constituido histórica y culturalmente, y no puede cambiarse de modo masivo de un día para el otro, y mucho menos en términos de “condena moral” a quien toma gaseosas en vez de exprimidos frescos, o de quien come carne –nada menos que en Argentina– en vez de ser vegano. Es posible y necesario dar los debates en este sentido, pero creo que es infructuoso y hasta contraproducente plantearlo como si fuera un problema moral y en términos individuales.

Por esto me es difícil pensar el derecho a la soberanía alimentaria como un derecho de los pueblos, sin transformar las estructuras económicas, reales, que niegan esos derechos, y que condicionan la producción y el consumo. Del mismo modo que el “derecho al trabajo”, el “derecho a la vivienda”, el “derecho a la educación” o el “derecho a la salud”. Del mismo modo que el trabajo asalariado niega la igualdad y la libertad, del mismo modo que el poder en la fábrica también niega la igualdad y la libertad, si no transformamos las estructuras económicas que niegan ese derecho –que en principio es una abstracción–, la soberanía alimentaria va a ser solamente eso: un derecho formal, abstracto, deseable, que buscamos, pero no va a ser una realidad.

Será un derecho proclamado como “los derechos del hombre”, en la revolución francesa, revolución cuyo contenido real –la instauración plena del capitalismo en Francia– impide hacer realidad las consignas populares y humanistas que proclama. Por eso, en última instancia, la soberanía alimentaria supone transformar las relaciones sociales de producción y de consumo. Y en camino hacia eso, creo que es necesario cambiar los “premios y castigos” que hoy impone el mercado a productores y consumidores, a través de la lucha política, la organización productiva alternativa, y una intervención estatal con este enfoque en la

economía. No se puede obligar a los productores agropecuarios a que produzcan otra cosa, de otra manera, en base a condenas morales ni escraches, cuando toda esta trama de relaciones sociales que compone su cotidianidad y su historia les indica que vayan para otro lado. Porque no va a dar resultado. No importa si está bien o mal, no funciona así. Y no está funcionando, más allá de que hay muchísimos avances en relación a la conciencia social sobre este tema y a la difusión de nuevas prácticas productivas. Es desde esta preocupación que planteo la cuestión de la lucha colectiva, de la política y del Estado. No apuntar contra productores o consumidores aislados, supuestamente insensibles –aunque los haya–, sino contra los nodos que les imponen condicionantes económicos y culturales para comprar y vender una cosa y no otra. Creo que eso es modificable en el corto plazo desde otro tipo de intervención política en el mercado, y en el largo plazo, desde la discusión sobre nuestra propia cultura. Si lográramos cambiar las reglas del juego del conjunto de las relaciones económicas y sociales en la sociedad argentina, y si hubiera otro esquema de premios y castigos para producir una cosa u otra, y otras posibilidades para elegir qué se consume, ahí sí tal vez podríamos hacer un “juicio moral” –si fuera el caso– sobre si tal productor, a pesar de que ahora las reglas del juego cambiaron, sigue queriendo tirar veneno arriba de la escuela y los alrededores de los pueblos; o si tal consumidor sigue optando por comida basura más cara cuando tiene alimentos sanos más baratos a su disposición. Pero mientras no se transforme todo ese conjunto que condiciona desde afuera y desde adentro las decisiones de los productores y los trabajadores rurales, así como de la gran masa de consumidores de alimentos, es muy difícil hacer un “juicio moral” de buenas y malas personas.

Por todo esto, entiendo que la cuestión de la soberanía alimentaria es una cuestión profundamente política, una cuestión que hace a la transformación del todo social, y no solo a la modificación de voluntades ficticias de individuos que tampoco están aislados. Creo que la soberanía alimentaria como realidad está atada indisolublemente a un cambio revolucionario de la economía y la política en nuestras sociedades, un cambio radical en el mejor sentido de la palabra. No me imagino una soberanía alimentaria conviviendo demasiado tiempo con un ordenamiento económico capitalista librado a su propia lógica, que les imponga otro tipo de condicionamientos a los productores y consumidores, tanto en el terreno

de los estímulos y castigos económicos, como en el plano de la formación de su subjetividad.

Esto es un gran problema. Porque si, llevada hasta sus últimas consecuencias, la soberanía alimentaria está supeditada a algún tipo de revolución social enorme, que la excede por mucho, entonces estamos más lejos de lo que pensábamos. No podemos engañarnos: es así. Sin embargo, hay mojones en el camino hacia ese horizonte, de corto y mediano plazo, que dan pasos en esa dirección, y que a la vez permiten ganar fuerzas sociales que hoy no tenemos para ese cambio de mayor alcance. Me refiero a ganar conciencias, organización, experiencias preparatorias, construcción de otro sentido común, y pisos de nuevos consensos y perspectivas sobre este tema en el conjunto de la sociedad. Pero no solo a partir de una “concientización” racional individuo por individuo, hecha de palabras contra palabras. Me refiero a estimular experiencias de lucha, en base a las necesidades y demandas de los sujetos realmente existentes en la Argentina de hoy –campesinos y pequeños productores en crisis, trabajadores rurales, consumidores malnutridos, en el terreno que condensa todas las fuerzas en pugna en la sociedad: la lucha política. No me refiero al Estado ni a la política burguesa, que últimamente se asimila demasiado fácil a “la política” en general. Es más, esa no me parece ni la única ni la mejor manera de la política. Me refiero a la política en sentido amplio, lo cual incluye y excede la política en las instituciones de este Estado.

Si esto es así, si este cambio está supeditado a una transformación del conjunto de las relaciones económicas y políticas en nuestra sociedad, ya no se trata solamente del 90 % que vive en la ciudad contra el 10 % que vive y produce en el campo. Tal vez se trata de otro 90 % contra otro 10 %: el de las mayorías populares del campo y la ciudad, contra las minorías privilegiadas del campo y la ciudad. Es un cambio con el pueblo, desde adentro y como parte de él, y no contra el pueblo. Y esto incluye a la parte del pueblo argentino que trabaja en el *campo real*: chacareiros, contratistas, trabajadores rurales de distinto tipo, tamberos, medieros, campesinos, etc. La visión liberal de este tema, en su concepción de que “cada uno” elige libremente lo que es y lo que hace, a la larga nos lleva contra el pueblo vía la condena moral de las mayorías sociales “porque se equivocan”, porque “eligen

mal a sus representantes”, “porque eligen mal lo que comen”, “porque producen mal”, “porque no se dan cuenta”, etc.

Entonces, la propuesta es mayorías agrarias y mayorías urbanas en pos de algún tipo de cambio político, que no comienza por el final –si este fuera un cambio revolucionario de fondo–, sino por tratar de empujar una política económica radicalmente distinta a la que venimos teniendo por lo menos desde hace 40 años en Argentina. Estamos hablando de otra ley de arrendamientos y de garantizar el pleno acceso a la tierra de los campesinos que hoy encabezan la lucha por la soberanía alimentaria; estamos hablando de hacer que se cumplan leyes que ya existen, como las laborales agrarias y las de la agricultura familiar; estamos hablando de recuperar el comercio de los granos que vendemos al mundo, pero también resolver de otro modo el comercio de frutas, verduras y carnes en el mercado interno; estamos hablando de ir hacia la producción nacional de otro tipo de tecnología bioquímica y mecánica, y de que el conjunto del aparato productor de alimentos –las famosas cadenas de valor–, sea de base nacional y esté orientado a nuestras necesidades como país, tanto en lo que hace al abastecimiento del mercado interno como en la exportación de excedentes, ya que también necesitamos divisas y tenemos con qué conseguirlas. Pero, en cualquier caso, que no haya nadie con hambre en Argentina. Para eso hay que poner en práctica un plan económico, que tiene que pasar en algún momento por las políticas estatales, y si es así entonces, ¿cómo tendemos algún tipo de puente entre quienes peleamos por la soberanía alimentaria en las ciudades con las mayorías agrarias realmente existentes? ¿O quién va a manejar los tractores de este cambio? ¿Vamos a echar a todos los productores y trabajadores que hoy están trabajando en el campo y vamos a poner unos nuevos? Tal vez algunos no se la bancarán y se irán, y muchos de los que estamos en la ciudad iremos a trabajar al campo. Pero aspiraría a que la mayoría de los trabajadores y productores actualmente existentes vayan a ser los protagonistas de un nuevo régimen agroalimentario. Porque creo que no hay que pensarlo contra ellos, sino *con ellos y para ellos*. En definitiva, una Argentina nueva va a estar construida por hombres y mujeres de la vieja Argentina.

Vuelvo a la cuestión de los sujetos. Si realmente peleamos y queremos que la soberanía alimentaria sea una realidad, creo que es necesario pensar con qué

aliados y protagonistas cuenta el sector agropecuario realmente, en determinado lugar y circunstancias. Ha habido avances enormes en este sentido en los cinturones hortícolas de las grandes ciudades, de acá de Paraná, de Buenos Aires, de Mar del Plata, y eso lo mostró el Foro por una Agricultura Popular y Soberana en Buenos Aires en mayo de este año. Ha sido un evento inédito que reunió un montón de organizaciones campesinas de migrantes que producen horticultura y otros alimentos. Ellas han planteado un programa muy integral, de corto y largo plazo, con un proyecto de reforma agraria muy interesante. Bueno ahí hay un punto de apoyo clave. Creo que es por ahí. A la vez, parece que ese es “otro mundo” en relación a lo que es la trama social y cultural de la producción pampeana extensiva: el mundo de la estancia criolla y la chacra gringa. Aquí, en las costas del Paraná, el sujeto probablemente no sea un “campesinado ancestral” con semillas conservadas desde tiempo inmemorial. Ese “campesinado ancestral” en la zona de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires o de Santa Fe, así, no existió nunca. No vivimos en los Andes. Aquí existieron colonos, gauchos y obreros rurales de otro tipo, y entre los indígenas que vivieron acá, la mayoría apenas descubrieron la agricultura hacía muy poco tiempo al momento de la llegada de los ocupantes europeos, y eran más bien nómades. De hecho, los indios que pelearon con Artigas por la tierra no agitaban la wiphala ni mucho menos. Mientras que, cien años después de aquella gesta, ya en el siglo XX, la lucha por la tierra cambió de color: fueron los gringos los que le pelearon la propiedad y las condiciones de arriendo a muchos grandes propietarios criollos. La composición étnica y de clases de la lucha agraria es cambiante en distintos territorios y en distintos momentos históricos. ¿Quiénes van a ser los protagonistas de este nuevo cambio?

Una revolución constituye la autoliberación y autoreconstrucción de las masas populares, sea una revolución anticolonial como la que tuvimos acá en 1810, o sea una revolución tipo socialista como ha habido en otros países, y hasta como han sido las revoluciones burguesas que destrabaron las transiciones al capitalismo en Europa en su momento. El hecho es que hubo masas enormes de gente cuya subjetividad se formó en las sociedades anteriores y, como parte de ese juego, entrando en crisis esa vieja sociedad, en determinadas condiciones y sin proponérselo explícitamente, transformaron su realidad y a sí mismas en otra cosa. Tengámoslo en cuenta cuando pensamos qué parte de los productores y los

trabajadores realmente existentes hoy en la pampa húmeda en la Argentina pueden ser parte de otro futuro, y qué contradicciones tienen ellos con este régimen agroalimentario que puedan ser el motivo para sumarse a un movimiento popular, urbano y agrario, que transforme esto en otra cosa.